

Berryer, no por frialdad de corazón, sino por ignorancia, se inclinaba á contestar la urgencia ó la eficacia de las medidas á tomar, y, como Thiers, se apresuraba más á acoger las críticas que á buscar las soluciones. Ciertos economistas, como Raudot y Béchar, llenos de ideas de descentralización, temían ante todo las invasiones del Estado, y, movidos por aquellos temores, se inclinaban á una reserva rayana de la inercia. En la comisión figuraban algunos diputados de la izquierda; y éstos, ya por impulso natural, ya de intento, se complacían en reproducir, en su lenguaje, algunas de las fórmulas que poco antes habían asustado, y sus palabras imprudentes, que parecían justificar las alarmas de los ultra conservadores, debilitaban aún más el espíritu de iniciativa (1).

Aquella timidez disminuyó, pero muy poco á poco, y siempre quedaron trazas de ella. Sin embargo, el examen de las cuestiones de asistencia se emprendió, si no con mucha confianza y ardor, al menos con un cuidado concienzudo. La comisión se dividió en tres subcomisiones. La primera estudió las instituciones propias para la infancia abandonada, desgraciada ó culpable: establecimiento de tornos, obras de caridad materna, creación de salas de asilo, reglamentación del trabajo industrial y de los contratos de aprendizaje, y organización de las colonias penitenciarias para muchachos detenidos. La segunda ocupóse del auxilio que en ciertos casos excepcionales es debido hasta á los trabajadores adultos y válidos; á esta segunda comisión se agregaron las cuestiones relativas á las sociedades obreras, á las habitaciones insalubres y á las sociedades de socorros mutuos. La tercera subcomisión buscó los medios de prevenir ó atemperar para el obrero pobre las miserias y sufrimientos que son la consecuencia ordinaria de la vejez: de aquí, estudios sobre las cajas de ahorros, las cajas de retiro, los hospitales y los hospicios. De esta manera se desarrolló á los ojos de los individuos de la Comisión la larga y triste cadena de los dolores humanos.

Había que condensar en un resumen general el conjunto de aquellas miras. Semejante trabajo, en virtud de su magnitud, exigía una fuerza sintética poco común. Designóse desde luego para ponente á Berryer, que no quiso asumir tan pesada carga, á causa de su ignorancia en materia social, y también, según él decía, á causa de su ineptitud para escribir. La tarea que asustaba á Berryer la deseaba Thiers; pero varios de sus colegas no se decidían á elegirlo, por temor á su hostilidad contra toda innovación y á su tendencia á confundir todos los proyectos en la misma acusación de socialismo. El

(1) «Cuando un proyecto es sometido á la comisión, los ultra economistas empiezan el ataque: Raudot, Desèze, Béchar y Camus son partidarios acérrimos de la descentralización; el excelente obispo de Langres dice una palabra acerca de los derechos de la caridad particular y acerca de que las fábricas substituyan á los hospitales; y nuestros pobres proyectos apenas pueden salvar algún jirón mutilado. A veces Thiers nos ayuda; pero con más frecuencia nos combate. Cuando Thiers nos ha atacado como socialistas, filántropos y utopistas, Manuel Arago nos defiende y, defendiéndonos, nos da el golpe de gracia; porque la comisión, asustada de nuestros agresores y de nuestros auxiliares, levanta la sesión, espantada del mal que iba á hacer haciendo algo.» (Carta del Sr. de Melún al Sr. de Falloux, 4 de diciembre de 1849, *Correspondencia inédita*.)

ilustre hombre de Estado penetraba aquellas repugnancias y por ellas experimentaba cierto despecho que disimulaba bajo una cándida vanidad: «No quieren que yo redacte el dictamen, decía; no me importa, pero estará mal hecho y honrará poco á la comisión (2).» A pesar de aquellas vacilaciones, Thiers fué elegido.

El 26 de enero de 1850, el ponente leyó su trabajo á la Asamblea, trabajo en que se revelaban las cualidades ordinarias de aquella maravillosa inteligencia: la doble aptitud para comprenderlo todo y hacerlo comprender á los demás, un método seguro á pesar de la abundancia de los detalles, y un lenguaje claro, siempre apropiado al asunto, sencillo y animado á la vez. Sin embargo, no podía negarse que el dictamen llevaba en sí las trazas de excesivos recelos. Thiers parecía más preocupado de abatir por última vez al socialismo que de fundar instituciones de beneficencia. Aquella elevada inteligencia solía ser á veces muy audaz y á veces muy tímida. En esta ocasión dominaba la timidez. Así opinaron los hombres más acostumbrados á la práctica de la caridad. Melún escribió: «Me temo que los pobres no se encuentren muy asistidos por la lectura de esta voluminosa obra maestra.»

Afortunadamente, si el dictamen de Thiers fué en sí más brillante que útil, no por eso dejó de realizarse el bien. Realizóse bajo la modesta forma de proyectos parciales debatidos por la comisión y sucesivamente sometidos luego á la Asamblea. No se tuvo, como hubieran deseado algunos, un *Código general de la asistencia pública*, obra ambiciosa, quizá ineficaz, y que la inestabilidad de los tiempos no hubiera dejado concluir. En cambio, se tuvo un buen número de leyes, limitadas sin duda á su objeto, pero prácticas y útiles: estas leyes fueron elaboradas y votadas sin ruido, como se preparan y realizan casi siempre las cosas verdaderamente duraderas y fecundas.

En los primeros meses de 1850 fué discutida una ley sobre las *habitaciones insalubres*. La iniciativa de esta proposición debía á un representante del Norte, impresionado por el amontonamiento de la población obrera en los subsuelos de la ciudad de Lilla. Según el proyecto, una comisión nombrada por el consejo municipal había de visitar los sitios considerados como insalubres, mandar hacer los trabajos de saneamiento necesarios, y si el saneamiento fuese imposible, prohibir el alquiler del local. El recurso á la autoridad superior era una garantía contra las arbitrariedades que pudieran cometer los consejos municipales ó las comisiones. La ley fué promulgada el 13 de abril (3). Poco tiempo después, la ley de 18 de junio de 1850 creó, bajo la garantía del Estado, una *caja de retiro ó de rentas vitalicias para la ancianidad* (4). Un mes después, el 15 de julio, un acto legislativo reguló la organización de las *sociedades de socorros mutuos* (5). Hacia el final de la legislatura, el problema de la *educación y del patronato de los muchachos detenidos* mereció la solicitud del Parlamento. Los menores de edad absueltos, pero enviados por decisión de los tribunales á una casa de

(2) Memorias inéditas de Armando de Melún.

(3) *Bulletin des lois*, 1850, primer semestre, número 2.868, página 413.

(4) Idem número 2.227, pág. 703.

(5) Idem, segundo semestre, número 2.297, pág. 99.

corrección, eran casi siempre encerrados en las cárceles de distrito ó en los presidios, donde, lejos de corregirse, acababan de corromperse; algunos establecimientos penitenciarios habían sido creados por la iniciativa particular, principalmente en Mattray; pero tales tentativas no se habían generalizado. Un proyecto debido á la comisión de asistencia tuvo por objeto llenar aquel vacío. El Estado y varios particulares, con la autorización y bajo la inspección del Estado mismo, habían establecido diferentes colonias penitenciarias; estas colonias, situadas en el campo, estaban destinadas á dar asilo á los desdichados muchachos que habían cedido al vicio antes de la edad del pleno discernimiento. Allí se les empleaba en trabajos agrícolas, estaban sometidos á una disciplina saludable é iniciados en los preceptos de la moral y de la religión. Un reglamento de administración pública había de determinar la manera de ejercer el patronato sobre los detenidos absueltos. La ley fué votada el 5 de agosto y promulgada el 13 (1).

Así llegóse á la suspensión de la legislatura. A la reapertura de la Asamblea, el mensaje del 12 de noviembre, merced á la tranquilidad momentánea que produjo, favoreció aquellos pacíficos trabajos. Sucedió con frecuencia, sobre todo en la población industrial de las ciudades, que muchos obreros, que vivían desde hacía tiempo en concubinaje, se hallaban animados del doble deseo de regularizar su estado por medio del matrimonio y de asegurar á sus hijos el beneficio de la legitimación. Pero á menudo les detenía la dificultad de reunir la documentación exigida por el oficial del estado civil, y también el coste de los documentos. Como á esto se añadía la inercia, dichos obreros aplazaban de día en día su resolución, hasta que, á menudo, les sorprendía la muerte. Una ley votada el 10 de diciembre de 1850 puso remedio á semejante estado de cosas: decidió que, en adelante, todos los documentos relativos al matrimonio de indigentes se extendieran gratuitamente por las alcaldías: todas las rectificaciones que se juzgasen necesarias habían de hacerse de oficio por exhorto del juzgado (2). En ese terreno de reformas útiles, la Asamblea, guiada por algunos hombres laboriosos y bienhechores, adelantaba á paso lento, pero firme. La elevación de los gastos de justicia impedía con frecuencia á los pobres el ejercer ante los tribunales hasta las reivindicaciones más legítimas. Creáronse las *oficinas de asistencia judicial*; estas oficinas, después de comprobar la indigencia y examinar someramente el litigio, habían de conceder ó negar la asistencia. Si la concedían, toda copia y expedición de documentos, toda diligencia judicial, hasta el trabajo de los oficiales públicos y de los abogados, todo había de ser gratuito (3). Los fraudes en la *venta de substancias alimenticias* eran numerosos y perjudicaban sobre todo á las familias menesterosas. Hízose una ley con objeto de reprimir con más eficacia aquellos abusos (4). En medio de aquellos múltiples cuidados, la Asamblea volvía siempre con marcada preferencia á las medidas protectoras de la in-

fancia y de la adolescencia. En tal espíritu procuró regular las condiciones de los *contratos de aprendizaje* (5). Finalmente, antes de ser disuelto, el Parlamento había de votar aún varias leyes sobre las *cajas de ahorros*, los *montepíos*, los *hospicios* y los *hospitales* (6). Otros proyectos que las necesidades de la orden del día ó la falta de acuerdo no permitieron llevar á buen término, fueron debatidos en las comisiones y dieron lugar á dictámenes: tales fueron las cuestiones relativas al descanso dominical (7), á los expósitos y al restablecimiento de los tornos, á los socorros domiciliarios, á la organización del servicio médico en las poblaciones rurales, á la admisión y envío de indigentes á las aguas termales. Así se revelaba la solicitud de la Asamblea, solicitud que procuraba aliviar todas las debilidades y todas las miserias. Aquel espíritu de beneficencia no olvidaba á ninguno de los desheredados de la vida: no olvidaba ningún detalle, extendiéndose con una bondad compasiva hasta á los seres privados de razón. Se comprenderá que aludimos á la ley *Grammont* sobre los malos tratamientos contra los animales, ley votada durante aquella legislatura de 1850. No cabe burlarse de tales preocupaciones porque la caridad, esa noble hija del cielo, realza cuanto toca, y hasta en sus manifestaciones más humildes merece que se la estimule, se la aprecie y se la ame.

La actividad laboriosa de la Asamblea no se revelaba tan sólo en las cuestiones de legislación caritativa, sino que se aplicaba también, con laudable celo, á llenar los vacíos de la legislación civil. Entre los representantes había magistrados, profesores y abogados, casi todos famosos por su sabiduría y su experiencia: el más eminente era Valette, profesor en la Escuela de Derecho de París y uno de los mejores jurisconsultos de su tiempo. Bajo los auspicios de aquellos doctos personajes fueron concebidos muchos proyectos. El más importante de estos, que llegó á la tercera deliberación, pero sin poder ser convertido en ley (8), fué la revisión de nuestro régimen hipotecario. Otras proposiciones menos extensas fueron votadas por la Asamblea; proposiciones que suprimían sensibles abusos ó realizaban importantes mejoras. Una ley de 10 de julio de 1850 sobre la *publicidad de los contratos de boda* tuvo por objeto llevar á conocimiento de tercero los capítulos matrimoniales convenidos por los cónyuges y evitar los fraudes que el régimen dotal favorecía (9). Una ley de 6 de diciembre de 1850, llenando una de las lagunas del Código civil, autorizó, en caso de separación de cuerpos, la acción en denegación de paternidad respecto al niño nacido más de nueve meses después de la separación (10). Finalmente, la calidad de francés, salva la facultad de opción en el año de la mayoría de edad, fué reconocida á todo individuo nacido en Francia de padres extranjeros nacidos también en nuestro suelo (11). Ciertamente que estos

(5) *Bulletin des lois* número 2.765, pág. 271.

(6) Idem, 1851, primer semestre, número 3.028, pág. 759. Segundo semestre, número 3.089, pág. 105; número 3.129, página 215.

(7) Dictamen de Montalembert, *Monitor* de 1850, pág. 3.530.

(8) La discusión fué interrumpida el 1.º de julio de 1851.

(9) *Bulletin des lois*, 1850, segundo semestre, número 2.288, página 76.

(10) Idem número 2.583, pág. 723.

(11) Idem, 1851, primer semestre, número 2.738, pág. 165.

(1) *Bulletin des lois*, 1850, segundo semestre, número 2.342, página 249.

(2) Idem número 2.592, pág. 738.

(3) Idem, 1851, primer semestre, número 2.680, pág. 93.

(4) Idem número 2.842, pág. 431.

proyectos no se referían sino á materias muy limitadas, pero atestiguaban un celo inteligente.

Los intereses puramente materiales eran también objeto de los cuidados de la Asamblea. El aumento de las rentas directas, el fácil cobro del impuesto territorial, el creciente aumento de los depósitos de las cajas de ahorros eran otras tantas pruebas de mejoramiento. El comercio y la industria, tan rudamente castigados por la súbita crisis del 24 de febrero, volvían poco á poco á una situación si no muy próspera, al menos casi normal. Algunos días antes de la suspensión de la legislatura, una ley votada casi sin discusión había suprimido el curso forzoso de los billetes del Banco de Francia. La Asamblea y el poder ejecutivo podían reivindicar igualmente el honor de tan satisfactorios resultados. En este orden de ideas, dos inventos, ya antiguos y de inmenso alcance, llamaban toda la atención de los poderes públicos: estos inventos eran el de la telegrafía eléctrica y el de los ferrocarriles. Una ley de 29 de noviembre de 1850 abrió á los despachos particulares el servicio telegráfico; desgraciadamente las líneas eran aún poco numerosas y las tarifas muy elevadas (1). En cuanto á los ferrocarriles, el período de ensayos había sido largo, tan largo que habíamos dejado que se nos adelantaran la mayor parte de los países de Europa: además esta industria había sufrido más que las otras por la catástrofe de 1848. Las grandes líneas que habían de formar el conjunto de nuestra red estaban empezadas, pero no había ninguna concluída ni próxima á estarlo, se procedía por trozos, abriendo una sección acá y otra acullá, y aplazando los recorridos que exigían las mayores obras de fábrica. Ni el Parlamento ni el poder ejecutivo permanecían indiferentes á tal estado de cosas: sin embargo, estuvo reservado al gobierno siguiente el imprimir á aquellos gigantescos trabajos un impulso decisivo.

Tal fué, en resumen, la obra de la Asamblea desde el triple punto de vista de las instituciones de caridad, del derecho civil y de la legislación económica. Aquellas medidas fueron preparadas, discutidas ó votadas en épocas diversas, pero fué sobre todo durante el corto período de tranquilidad que siguió al mensaje del 12 de noviembre cuando se desplegó aquella juiciosa actividad. Por esto hemos creído oportuno reunir aquí el conjunto de aquellos decretos y decisiones.

La tranquilidad no era tan grande que las susceptibilidades, poco antes tan prontas, no despertasen á veces. El proceso Von-Allais, que acababa de desarrollarse ante los tribunales, tuvo su epílogo; el gabinete quiso la cesantía de Yon; la mesa de la Asamblea se opuso á ello: Yon dimitió; y aquella triste cuestión no terminó sin promover algunas recriminaciones lastimosas. A fines de diciembre surgió otro incidente. Un representante, el Sr. Mauguin, había sido encarcelado por deudas: la Asamblea alegó la inviolabilidad legislativa y, á pesar de los esfuerzos del ministro de la Justicia que invocaba el silencio de la Constitución y las prescripciones del derecho común, ordenó la excarcelación del representante. Uno de los cuestores, el Sr. Baze, se presentó personalmente en la cárcel de Clichy para hacer ejecutar la decisión parlamentaria. La justicia acababa de

condenar á Allais y de censurar severamente á Yon, el hombre de confianza del palacio legislativo: la Asamblea, á su vez, parecía vengarse de la magistratura anulando un mandamiento judicial. Aquel rencor pareció mezquino, y semejante afectación de omnipotencia encontró pocos aprobadores. A tan sensibles altercados se añadían las querellas de los periódicos, querellas que renacían á veces con una acritud de mal agüero.

Sin embargo, la feliz concordia fundada en el mensaje del 12 de noviembre no parecía seriamente alterado. Persistíase en la esperanza de que la armonía sería duradera. ¡Vana esperanza! Con Luis Napoleón sucedía casi siempre lo imprevisto. Había surgido la paz el 12 de noviembre, cuando nadie se atrevía á contar con ella; y sobrevino la guerra dos meses después, cuando todo el mundo empezaba á acostumbrarse á la paz.

VII

En 2 de enero de 1851, el periódico *La Patrie*, uno de los órganos ordinarios del presidente, publicó, sin dar la fecha, pretendidas instrucciones del general en jefe del ejército de París á sus oficiales. Según dichas instrucciones, toda orden no emanada del general en jefe ó de sus agentes regulares había de ser considerada como nula. No se había de escuchar á los representantes. Toda instancia, intimación ó requerimiento de cualquier funcionario civil, judicial ó político había de ser rigurosamente rechazado.

Estimóse en seguida que *La Patrie* había publicado tan grave documento bajo la inspiración ó al menos con la aquiescencia del Elíseo. Si el origen de aquella noticia sensacional había podido ser dudoso, las últimas dudas se disiparon cuando, al día siguiente, se vió al príncipe Jerónimo Napoleón subir á la tribuna á interpellar al ministro de la Guerra sobre la orden del día redactada, según decían, por el general Changarnier. No era fácil dejar de comprender el lazo que aquella interpelación ocultaba. Si Changarnier confesaba las instrucciones, se indisponía con la Asamblea; si, por el contrario, las negaba, aparecía de nuevo como el general del Parlamento y daba pretexto á medidas contra él. El príncipe Napoleón hallaba doble ventaja en hacerse agente de aquella maniobra. Atacando al comandante del ejército de París, desempeñaba su papel de buen montañés; sirviendo al Elíseo, mostrábase buen pariente de Luis Napoleón.

El ministro de la Guerra, general Schramm, pidió un plazo para buscar la orden del día en cuestión. La Asamblea, impaciente, acordó la discusión inmediata. El príncipe Napoleón leyó el artículo de *La Patrie*, lo comentó con más perfidia que habilidad y se esforzó por dividir á la mayoría. Una desaprobación casi universal acogió sus palabras: el orador era para la derecha un adversario, y para la izquierda un aliado sospechoso: además, se presentaba una comedia de familia. El general Schramm renovó su petición de aplazamiento. Pero el general Changarnier, directamente aludido, no era hombre para escudarse detrás de su jefe. Subió á la tribuna y dijo: «Mi honorable amigo, el señor general Schramm, tendrá á bien permitirme dar un informe que con el tiempo no podrá encontrar, puesto que el documento señalado por el periódico *La Patrie* no existe.»

Changarnier añadió que, á la verdad, poco tiempo después de la insurrección de Junio, dió á la guardia nacional una instrucción para asegurar la unidad del mando durante el combate: pero afirmó que ni en dicha instrucción ni en ninguna otra había negado el derecho constitucional á la Asamblea. A estas palabras, estallaron los aplausos y se prolongaron hasta convertirse en ovación. El príncipe Napoleón procuró en vano contestar: los clamores ahogaron su voz, y la orden del día pura y simple fué votada casi por unanimidad.

Aquel ataque solapado había tenido el único desenlace que merecía. Pero á continuación se verá la crisis de que fué origen, pretexto ó punto de partida.

Al día siguiente, los representantes, al llegar al Palacio Borbón, se enteraron de la retirada del gabinete. La sorpresa fué extraordinaria. La negativa opuesta el día antes al aplazamiento solicitado por el general Schramm no era suficiente para explicar una crisis. No se acababa de dar crédito á la noticia: los ministros en persona anunciaron su dimisión. En la incertidumbre que reinaba, las suposiciones fueron innumerables. Durante el día 5 de enero, que era domingo, circularon toda clase de rumores. Hablóse de un ministerio Faucher, de un ministerio Billault, del mantenimiento de Foul y Barroche en el gabinete: decíase que Dupin y Barrot habían sido llamados al Elíseo. El 6 de enero abrióse la sesión parlamentaria en medio de las más vivas preocupaciones. La orden del día comprendía la discusión de la ley sobre el régimen hipotecario; pero nadie escuchaba. Toda la vida se concentraba en los pasillos. Se detenía al paso y se interrogaba con afán á los individuos de la mayoría que, como Barrot, Faucher y Malleville, parecían los mediadores naturales entre la Asamblea y el Elíseo.

En medio de toda aquella confusión, un rumor dominaba á todos los demás: el de la destitución de Changarnier.

Este rumor no carecía de fundamento, y la crisis no tenía otro origen. En el mes de octubre anterior, Luis Napoleón había concebido ya la idea de desembarazarse del comandante del ejército de París, y si bien aplazó entonces su designio, fué sin renunciar á él. La ovación hecha al general en la sesión del 3 de enero precipitó el desenlace. Poniéndose en el lugar del ministro de la Guerra, Changarnier había afirmado los derechos del Parlamento, constituyéndose en protector de la Asamblea. La Asamblea, á su vez, le había demostrado, con sus aclamaciones, que le adoptaba como guardián y protector de sus prerrogativas. Decididamente, Changarnier hacía el papel de *Guisa*, pero el presidente no quería ser *Enrique III*, y resolvió en el acto desarmar á aquel altivo servidor, más incómodo que un enemigo.

Tomada esta resolución, quedábale al príncipe un cuidado: el de temperar á los ojos de los representantes el efecto de tan grave medida. Quitándole al Parlamento su general, hubiera querido guardar consideraciones al Parlamento mismo. Con su natural á la vez audaz y tímido, sólo le gustaba dar golpes sucesivos: hasta curaba las heridas que hacía, y para inferir otras, esperaba que las primeras se hubiesen cicatrizado.

En aquellos días de crisis, conferenció aisladamente con varios miembros influyentes de la Asamblea, tales como Molé y Darú. Hasta llegó á proponer á Barrot

que formase un ministerio que firmara la destitución de Changarnier. Barrot declinó el ofrecimiento: no es que el poder del comandante en jefe no le pareciese exorbitante, pero juzgaba inoportuno el momento de semejante destitución. «Si ha crecido la situación de Changarnier, hacia observar, es que, en la ausencia de un gabinete parlamentario, la Asamblea busca en el general el apoyo que no encuentra en otra parte.» El vanidoso hombre de Estado esperaba que, si volvían á las tradiciones constitucionales, sería él el jefe designado del ministerio futuro, y más bien se reservaba que se negaba. No satisfecho con aquellas conferencias íntimas, el presidente convocó, el 8 de enero, en el Elíseo, á los principales miembros de la mayoría: Reunieron ocho: Dupin, Molé, Thiers, Barrot, Berryer, Broglie, Daru y Montalembert. Al reunir á estos graves personajes, Luis Napoleón no quería proponerles que formasen gabinete, ni consultarlos sobre un proyecto que era irrevocable, sino que los convocaba á una especie de conferencia.

Después de haberles dado las gracias por su asistencia, les expuso que el mando del ejército de París, creado en circunstancias excepcionales, no tenía ya razón de ser, puesto que la paz pública hacía tiempo que estaba restablecida. «Ese mando, añadió, es anormal, exorbitante, y forma dentro del Estado un tercer poder que entorpece la acción de los otros dos. Tengo derecho á poner fin á tal estado de cosas, y estoy resuelto á hacer uso de este derecho; pero os suplico que seáis, cerca de la Asamblea, los garantes de la legalidad de la medida y de la lealtad de mis intenciones.»

La sorpresa fué grande y se tradujo por un silencio perplejo. Bajo aquella cortesía llena de amenidad que le era habitual, el príncipe ocultaba una pretensión que rayaba en impertinencia. Luis Napoleón iba á publicar un decreto que, bajo una forma indirecta, hería al Parlamento, y quería que los jefes del Parlamento no solamente no fuesen adversarios de la medida, sino que se convirtiesen en promotores, en heraldos y sostenedores de la misma.

Dupin era el presidente de la Asamblea, y, como tal, habló el primero: «¡Cómo, exclamó; á consecuencia de un incidente parlamentario en que el general hizo protestas de respeto á la representación nacional, vais á despojarlo de sus funciones!» Del mismo modo habló Barrot. El duque de Broglie concedía gustoso la legalidad al acto presidencial: «Pero, añadió con su acostumbrada gravedad, la cordura de un gobierno consiste menos en hacer uso de todo su derecho que en usarlo con oportunidad y moderación.» Dos de los interlocutores del príncipe le eran particularmente favorables: Molé, que había servido al primer Imperio y se acordaba de ello; y Daru, cuya familia se hallaba también unida á las tradiciones imperiales. Uno y otro fueron, sin embargo, de la misma opinión que sus colegas, y, en forma más suave y afectuosa, expresaron iguales repugnancias. «No es posible elegir peor momento para destituir al general...» dijo Molé. «Se acabó el acuerdo entre los dos poderes,» añadió Daru...

Más altivo y más desconfiado, Berryer mostróse lleno de asombro, casi ofendido por el extraño papel que Luis Napoleón quería confiar á los jefes de la mayoría: «No podemos aceptar esa misión; no nos escucharían si nos empeñáramos en quitar al acto que se prepara el

(1) *Bulletin des lois*, 1850, segundo semestre, número 2.567, página 685.